

Señores

**JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALI (Reparto)**  
**E. S. D**

**MEMORIAL PODER**

**DANIELA RAMIREZ HURTADO**, mayor de edad y vecina de la ciudad de Cali, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en calidad de víctima en accidente de tránsito, **NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Cali, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de esposo de la víctima en accidente de tránsito la Sra. **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, quienes obran en nombre propio y en representación del menor **JUAN ESTEBAN BEDOYA RAMIREZ**, identificado con tarjeta de identidad No. 1.109.677.117 de Cali, y con registro civil de nacimiento NUIP. No. 1.109.677.117 de la Notaria Dieciséis (16) del Círculo de Cali, en calidad de hijo menor de la víctima en accidente de tránsito la Sra. **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, por medio del presente escrito manifestamos que conferimos poder especial amplio y suficiente a la Abogada Dra. **LUZ ADRIANA CALDERON GOMEZ**, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la C.C No. 67.029.642 de Cali, portadora de la T.P. No. 338.585 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico inscrito en el Registro Nacional de Abogados [luz.calderon@hotmail.com](mailto:luz.calderon@hotmail.com); para que en nuestro nombre y representación inicie y lleve a su culminación acción de **REPARACIÓN DIRECTA** consagrada en el artículo 140 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, entidades representadas por el Señor Alcalde, Dr. **JORGE IVAN OSPINA** o quien haga sus veces en sus faltas temporales o absolutas y así lo demuestre ante éste Despacho, y por el Secretario de Infraestructura Ing. **NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL** o quien haga sus veces en sus faltas temporales o absolutas y así lo demuestre ante éste Despacho, con el fin de que sean indemnizados y reparados de manera integral los daños y perjuicios tanto morales como materiales objetivados y subjetivados, presentes y futuros que padecemos, causados por la omisión en que incurrió la administración en su deber de mantenimiento de la malla vía que tuvo el Estado y el Municipio a través de los nombrados entes administrativos, para con el poderdante la Señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, en consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 22 de enero de 2021, a las 20:45 horas aproximadamente, en la calle 62 con carrera 1J, vía pública del Municipio de Cali – Valle; quien se desplazaba en calidad de conductor del vehículo clase motocicleta de placa No. BKZ87D, en una evidente falla del servicio, el desconocimiento de los deberes de la Administración (obligación de implementar las señales preventivas, vigilar la realización de las obras públicas, controlar el tránsito en calles y carreteras y prevenir los riesgos que con ellos se generan) y en general por la violación de todos los demás derechos que nos asiste según nuestro apoderado lo invoquen en la respectiva demanda, todo conforme a los hechos y pretensiones que describirán nuestro apoderado en la respectiva demanda de reparación directa, que deberá instaurar ante este Juzgado.

Nuestra apoderada Doctora **LUZ ADRIANA CALDERÓN GÓMEZ**, queda facultada para accionar, formular las pretensiones pertinentes en derecho, estimar perjuicios morales, recibir, desistir, transigir, sustituir y reasumir, interponer y sustentar recursos procedentes en las instancias, incluyendo agotamiento de procedimientos internacionales ante la autoridad competente que vigile la protección de los derechos humanos y en general, gestionar todas las diligencias legales que considere imprescindibles en defensa de nuestros derechos, especialmente las consagradas en la norma procesal y para realizar los trámites administrativos pertinentes para el recibo de lo que se llegare a condenar por los perjuicios que se demanden, conforme lo ha referido este memorial poder.

Cel. 317-6810068 - 318-5908912.  
Email: [luz.calderon@hotmail.com](mailto:luz.calderon@hotmail.com)/[derecholegalyviasas@outlook.com](mailto:derecholegalyviasas@outlook.com)  
Santiago de Cali-Colombia



LUZ ADRIANA CALDERON GOMEZ.  
Abogada  
Universidad Cooperativa de Colombia.

Sirvanse Señor Juez, reconocerle personería a nuestra Apoderada en los términos y para los fines señalados en este poder.

Atentamente,

*Daniela Ramirez H.*  
DANIELA RAMIREZ HURTADO.  
C.C. No. 1.144.191.836 de Cali (V).  
Correo electrónico: *daniramirezhurtado@gmail.com*

*Nolberto Andres Bedoya Giraldo*  
NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO.  
C.C. No. 1.144.144.526 de Cali (V).  
Correo electrónico: *andres.bedoya.giraldo90@gmail.com*

Acepto:

*Luz A. Calderon*  
LUZ ADRIANA CALDERÓN GÓMEZ.  
C.C. No. 67.029.642 de Cali (V).  
T.P. No. 338.585 del C.S. de la Judicatura.  
Correo electrónico: *luz.calderon@hotmail.com*.



Cel. 317-6810068 - 318-6908912.  
Email: *luz.calderon@hotmail.com* / *derecholegalyviasas@outlook.com*  
Santiago de Cali-Colombia

15  
NOTARIA

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA QUINCE DEL CIRCULO DE CALI  
LA NOTARIA QUINCE (E) DEL CIRCULO DE CALI

CERTIFICA:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR:  
Daniela Ramirez SE IDENTIFICÓ CON LA  
C.C. No. 1144191836 T.P. No. Gu QUIEN  
RECONOCIÓ SU CONTENIDO COMO CIERTO Y DECLARÓ  
QUE LA FIRMA Y HUELLA SON SUYAS

EL OTORGANTE: Daniela Ramirez H.

CAL 30 MAR 2021

ALBA ENIDH LÓPEZ GIRALDO  
NOTARIA 15 (ENCARGADA) DE CALI

15  
NOTARIA

SE AUTORIZA POR  
INSISTENCIA DEL INTERESADO

NO SE REGISTRO BIOMETRIA

Fecha: 30 MAR 2021 Falla Técnica ☒

Hora: 9 am C.C. Ext. ☐ Otros ☐

15  
L

15  
NOTARIA

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA QUINCE DEL CIRCULO DE CALI  
LA NOTARIA QUINCE (E) DEL CIRCULO DE CALI

CERTIFICA:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR:  
Nelber Andres Bedoya Giraldo SE IDENTIFICÓ CON LA  
C.C. No. 1144144521 T.P. No. Gu QUIEN  
RECONOCIÓ SU CONTENIDO COMO CIERTO Y DECLARÓ  
QUE LA FIRMA Y HUELLA SON SUYAS

EL OTORGANTE: [Firma]

CAL 21 MAY 2021

ALBA ENIDH LÓPEZ GIRALDO  
NOTARIA 15 (ENCARGADA) DE CALI

NO SE REGISTRO BIOMETRIA

Fecha: 1 MAY 2021 Falla Técnica ☒

Hora: 8 am C.C. Ext. ☐ Otros ☐

15  
NOTARIA

SE AUTORIZA POR  
INSISTENCIA DEL INTERESADO

Señor  
**JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCULO DE CALI - (REPARTO)**  
E.S.D.

**Medio de Control:** REPARACIÓN DIRECTA.

**DEMANDANTES:** DANIELA RAMIREZ HURTADO (víctima).  
NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO (Compañero  
permanente de la Víctima).  
JUAN ESTEBAN BEDOYA RAMIREZ (hijo de la  
Víctima).

**DEMANDADOS:** MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA  
DE INFRAESTRUCTURA.

**ANEXO ESPECIAL:** Amparo de pobreza.

**LUZ ADRIANA CALDERÓN GÓMEZ** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 67.029.642 de Cali, Tarjeta Profesional de Abogado No. 338.585 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de los señores **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, mayor de edad, vecina de Cali (V), identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.191.836 de Cali (V), **NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO**, mayor de edad, vecino de Cali (V), identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.144.526 de Cali (V), quienes obra en nombre propio y en representación del hijo menor **JUAN ESTEBAN BEDOYA RAMIREZ**, identificado con tarjeta de identidad No. 1.109.677.117 de Cali (V), dentro del asunto de la referencia, ante Usted respetuosamente me permito instaurar **DEMANDA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA**, consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011) que deberá tramitarse de acuerdo al **PROCEDIMIENTO ORDINARIO** que prescribe el Art. 140 del C.P.A.C.A, contra el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, entidades representadas legalmente por el señor Alcalde **JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ** y el Secretario de Infraestructura Ing. **NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL** o quien haga sus veces en sus faltas temporales o absolutas y así lo demuestre ante éste despacho, o quienes hagan sus veces respectivamente, siendo estos la parte convocada, con el fin de que se hagan las declaraciones y condenas que más adelante formularé, con base en los siguientes:

## **CAPITULO 1.**

### **IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES.**

En lo que tiene que ver con la legitimación en la causa, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de sus providencias ha manifestado lo siguiente:

*“[...] La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y el material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.*

*A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.*

*Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial*<sup>1</sup>. (negrilla y subraya fuera de texto original)

Conforme lo anterior, para el presente asunto, los extremos activos y pasivos se integran de la siguiente manera:

#### **PARTE DEMANDANTE:**

- **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, identificada con C.C. 1.144.191.836 de Cali (V), obrando en nombre propio en calidad de víctima directa - lesionada. Domiciliados en la ciudad de Cali. Dirección de notificación: calle 73 B No.3BN – 50 de la ciudad de Cali. Correo electrónico: [dependientejuridico@gmail.com](mailto:dependientejuridico@gmail.com).
- **NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO**, identificado con C.C. 1.144.144.526 de Cali (V). obrando en nombre propio en calidad de compañero permanente de la señora Daniela Ramírez Hurtado. Domiciliados en la ciudad de Cali. Dirección calle 73 B No.3BN - 50 de la ciudad de Cali. Correo electrónico: [dependientejuridico@gmail.com](mailto:dependientejuridico@gmail.com).
- Los intereses del menor **JUAN ESTEBAN BEDOYA RAMIREZ**, identificado con T.I. 1.109.677.117 de Cali (V), son representados por sus padres **DANIELA RAMIREZ HURTADO** y **NOLBERTO ANDRES BEDOYA**

---

<sup>1</sup> Véase la sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A. Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 50001-23-31-000-2012-00159-01(59503)

GIRALDO, de conformidad con el poder debidamente conferido, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Código General del Proceso.

En este orden de ideas, claramente puede colegirse que el grupo familiar accionante, está plenamente legitimado para actuar dentro del presente trámite ante la judicatura, toda vez que, se satisfacen los criterios jurisprudenciales establecidos por el H. Consejo de Estado, en los cuales se ha señalado que:

*“[...] Cuando se expide un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre éste y aquéllos y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecerlo, teniendo en cuenta la solemnidad prevista por la ley. [...]”*

### **PARTE DEMANDADAS:**

La persona jurídica “Nación” está representada por diversos funcionarios de las distintas ramas del poder público que despliegan las tradicionales funciones públicas legislativa, administrativa y jurisdiccional y de los órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado,<sup>3</sup>

- **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, entidades representadas legalmente por el señor alcalde **JORGE IVAN OSPINA** y el secretario de Infraestructura Ing. **NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL** o quien haga sus veces en sus faltas temporales o absolutas y así lo demuestre ante este despacho, o quienes hagan sus veces respectivamente. Dirección de notificación: Centro Administrativo Municipal – CAM, Avenida 2 Norte No. 10 – 70 de la ciudad de Cali. Correo electrónico: [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co).

Quiere decir lo anterior, que el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, no realizo a través de su agente o delegado, la reparación de la vía y que estuviera en óptimas condiciones para su utilización, y, por ende, le cabe responsabilidad en el presente caso.

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia, definen que *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”*. (se destaca)

En desarrollo de tales postulados, el artículo 287 superior establece que las entidades territoriales, dentro de las cuales se encuentran los municipios (artículo 286 C. P.), gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud la Carta les reconoce el derecho de

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C, Consejera Ponente Olga Mérida Valle de la Hoz; sentencia del 29 de febrero de 2012, radicación 27001-23-31-000-1999-00684-01 (20858)

<sup>3</sup> Al respecto puede consultarse la sentencia de septiembre 4 de 1997, Radicación número: 10285, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido sentencia de 7 de diciembre de 2004, Ref. 14.676 (0491), Consejero Ponente: Dr. Alir E. Hernández Enríquez.

governarse por autoridades propias, de ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y de establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales.

## **CAPITULO 2.**

### **HECHOS.**

1. Para el mes de enero de 2021, la señora Daniela Ramírez Hurtado, tenía 25 años de edad y trabajaba para la empresa **CRIPACK S.A.S.**, desempeñando como actividad económica el cargo de Auxiliar contable.
2. El día 22 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 20:05 horas, la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, se desplazaba en una motocicleta AKT, línea AK110 NV, de placa BKZ-87 D; se movilizaba por la calle 62 con carrera 1 J del municipio de Santiago de Cali.
3. La señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, para llegar a su destino transitaba a la altura de la calle 62 con carrera 1 J de la ciudad de Cali, como consecuencia del deterioro y mal estado de la vía pierde el control de su vehículo motocicleta de placa BKZ87D.
4. En el lugar el accidente se hizo presente el agente de tránsito de placa No. 192 el señor GUSTAVO ADOLFO POSSO POPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.517.995, quien atiende el procedimiento, describiendo y registrando en el informe policial de accidente de tránsito No. A001113940, el día de los hechos, el modo tiempo y lugar, el deterioro y las condiciones en que se encontraba la carretera, determinando como HIPOTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Cod. 306, especifica: HUECO EN LA VIA DE GRAN TAMAÑO, se vislumbra que en la forma que se encuentra es imposible determinar que existía una reparación vial, el deterioro de la carretera genera imposibilidades para el tránsito vehicular.
5. El Código Nacional de Transito (ley 769 de 2001), en su artículo 3 establece que los alcaldes son autoridades de tránsito, y el artículo 5 del mismo código establece que *“las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento **será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.**”*
6. Como consecuencia del accidente de tránsito y de la omisión de las entidades del Estado, la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, sufre lesiones, afectando su núcleo familiar, en su vida en relación y el aporte económico que la víctima realizaba cada mes para ayudar con los gastos del hogar, pues la señora Ramírez Hurtado se encontraba para el momento de los hechos trabajando en la empresa **CRIPACK S.A.S.**, desarrollando actividades de Administración desempeñando el cargo de Auxiliar Contable, actividades económicas que fueron su sustento económico y el de su familia, y con eso proporcionaba su aporte económicamente al mantenimiento de gastos, lo que afecto a su pareja e hijo menor.

7. La señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO** (Lesionada), **NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO** (Esposo de la lesionada), quienes actúa en nombre propio y en representación del menor **JUAN SEBASTIAN BEDOYA RAMIREZ** (Hijo de la lesionada), conforman una familia que siempre se ha caracterizado por su gran unión, amor y solidaridad entre sus miembros.
8. La señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, fue trasladada por la ambulancia de placa DCK495 (Móvil 237) conducida por el señor Anderson Burbano y la paramédica Jenny Lozano, a la clínica Cristo Rey, donde recibió atención medica por las lesiones sufridas en el accidente de tránsito: trauma cráneo cefálico leve a nivel occipital y frontal, trauma en la rodilla derecha con laceración y afectación la rodilla izquierda. Como se puede evidenciar en reporte de historia clínica No. 41485 de fecha del 22 de enero de 2021, que emiten por medio de la empresa AM&P DEL VALLE S.A.S.
9. En la clínica Cristo Rey registran en la historia clínica el diagnóstico médico que presenta la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, es *TRAUMA CONTUNDENTE A NIVEL DE LA RODILLA DERECHO CON POSTERIOR EDEMA Y DOLOR, CON LIMITACIÓN FUNCIONAL*.
10. La calle 62 con carrera 1 J, está ubicada en el barrio Los Guayacanes que pertenece a la Comuna 5 del perímetro urbano del Municipio de Santiago de Cali, situación que hace responsable del accidente de tránsito materia de la demanda a el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, encargada del control de la infraestructura de las vías, que todas se encuentren de forma adecuada para la seguridad de los ciudadanos que realizan la actividad de conducir, se denota negligencia y omisión de las autoridades Municipales y las demás entidades, quienes ante la existencia de las graves fallas existentes en la estructura de la vía, situación que se agrava aún más, si se tiene en cuenta que a pesar de los peligros existentes en la vía, la falta de señalización y la oscuridad del sector, las autoridades Municipales no procedieron a tomar las medidas adecuadas para evitar y prevenir los accidentes que pudieran llegar a presentarse por el mal estado de las vías.
11. De conformidad con la sustentación del hecho No. 10, de la presente demanda, es importante mencionar señor Juez, que **el día 28 de octubre de 2020, en reunión del comité de planeación de la comuna 5 de Cali, mediante Acta No. 4173.405.1.14.14.** con *“Objetivo: Intervención de Ingeniero Nestor Martinez Sandoval – Secretario de Infraestructura de Cali”*. En el punto 2. *“Intervención del ingeniero Nestor Martinez Sandoval – Secretario de Infraestructura”*., de la página 3 del Acta, se observa el descontento de los lideres comunales ante el retiro de la reunión del secretario de Infraestructura (el secretario de Infraestructura deja como grupo de apoyo a: Fernando Paz Mera, Mónica Barrero y María Alejandra Rivera) al no escuchar a la comunidad frente a la problemática del deterioro de la malla vial, porque desde hace 4 años atrás hubieron reuniones priorizando las calles para la intervención.

Igualmente, indican en la intervención los lideres comunales que *“el proceso viene mal, las ingenieras no conocen la ciudad, hablo de la viabilidad,*

Infraestructura se burló, viabilizado por las ingenieras, esta dentro del o que se comprometió Armitage” – líder comunal del barrio Urbanización Villa de Veracruz. Por otra parte, el líder comunal del barrio Villa del Parque dijo “el tema de infraestructura amerita que sea atendido ...”, en el escrito del acta también refieren que desde el año 2018, ha habido compromisos, que hubo reuniones con el Ing. Nestor Marínez Sandoval cuando era Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento.

Con lo anterior señor Juez, es evidente la omisión en la falla del servicio por parte de la Administración Municipal – Secretaria de Infraestructura de Santiago de Cali, resaltando que la reunión del comité de planeación referenciada en este hecho fue realizada 2 meses y 24 días antes de ocurrido el accidente tránsito que sufrió la víctima señora DANIELA RAMIREZ HURTADO.

12. Señor Juez en las Acta No. 4173.405.1.14.006 de fecha del 13 de marzo de 2018 y Acta No. 4173.405.1.14.010 de fecha del 10 de abril de 2018, (anexos probatorios) también se puede observar que la administración municipal – Secretaria de Infraestructura de Santiago de Cali, tenía conocimiento del mal estado de las vías en la comuna 5 y al caso concreto de la presente demanda de la calle 62 entre el tramo que comprende entre la Carrera 1D y Carrera 2, donde se ubica en ese tramo de vía el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito de la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO; Quedando de esta manera demostrada la omisión en la falla del servicio del Municipio de Santiago de Cali.
13. Del siniestro vía sufrido por la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, fueron testigos presenciales del hecho el señor **BRYAN PANTOJA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1144154496, y el señor **CARLOS ANDRES CORTES TIMARAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1151944550.
14. En este orden de ideas, teniendo en cuenta los hechos generadores de responsabilidad y los daños y perjuicios causados a los demandantes, se concluye la RESPONSABILIDAD por parte de la entidad demandada y por consiguiente la relación de causalidad.
15. El día 12 de enero de 2023, la Procuraduría 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos realizó audiencia de conciliación extrajudicial en la cual se agotó el requisito de procedibilidad exigido de conformidad con el tenor del Artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, en concordancia con el Artículo 161 del CPACA, la conciliación se declaró fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. (Anexo acta).

### **CAPITULO 3.**

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES**

##### **3.1. De la responsabilidad del Estado.**

La responsabilidad patrimonial del Estado, se encuentra consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, en virtud del cual se establece que el

Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que se causen por la acción u omisión de las autoridades públicas; al respecto dicha norma dispone:

“Artículo 90. **El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.**

*En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir [...]” (se destaca)*

En atención a los postulados del artículo en cita, se fundamentan diversos títulos de responsabilidad atribuibles al Estado que comprenden entre otros: la falla del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional; pero en últimas, el verdadero y auténtico fundamento de la responsabilidad patrimonial de Estado, se basa en el deber que tiene de proteger y garantizar la efectividad de los derechos que se reconocen a los administrados, los cuales no pueden ser vulnerados por daños que lesionen su patrimonio y que alteren la igualdad que se pregona de todos los ciudadanos frente a las cargas públicas, que precisamente lo configuran antijurídico en sí mismos.<sup>4</sup>

La Corte Constitucional ha considerado como elementos de responsabilidad del Estado los siguientes:

“[...] Con fundamento en este postulado de principio, el instituto resarcitorio se configura siempre y cuando: (i) ocurra **un daño antijurídico o lesión**, (ii) **éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público** y (iii) **exista una relación de causalidad entre el daño y la acción u omisión del ente público**; ampliándose de este modo el espectro de la responsabilidad estatal al superar el postulado inicial de la falla en el servicio, para adentrarse en el ámbito del **daño antijurídico**-entendido como aquél daño patrimonial o extrapatrimonial que se causa en forma lícita o ilícita al ciudadano, **sin que éste se encuentre en la obligación jurídica de soportarlo**-. [...]” (Subrayado y negrilla fuera de texto)<sup>5</sup>

En unísono, el Consejo de Estado ha definido como presupuestos de la responsabilidad estatal los siguientes:

“Pues bien, según la jurisprudencia de esta Sala, para que se pueda declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, el juez debe verificar la existencia de tres elementos, a saber: i) la existencia de **un daño antijurídico**; ii) **la imputación del daño** a la acción u omisión de la entidad pública; y iii) **el nexo de causalidad** existente entre el daño y la acción u omisión de la Autoridad Pública”<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Tamayo Jaramillo, Javier. La Responsabilidad del Estado. El daño antijurídico, P. 134

<sup>5</sup> Sentencia C-619 de 2002

<sup>6</sup> CONSEJO DE ESTADO. Sentencia de ocho (8) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Radicado No.: 50001-23-31-000-2006-00031-01 (38071). M.P.: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO.

Desde la anterior perspectiva, se tiene entonces que para que se pueda predicar la responsabilidad del Estado, deben concurrir en su juicio, la constatación de un daño antijurídico, la imputación de dicho daño al Estado como tal y que entre aquel y esta exista un vínculo o relación de causalidad que determine en ultimas en cabeza del estado la obligación de indemnizar los perjuicios causados.

### **3.2. Elementos de la responsabilidad del Estado.**

De acuerdo con el artículo 90 constitucional que consagra como ya se ha dicho, la cláusula general de responsabilidad del Estado, se distinguen dos elementos fundamentales: el daño antijurídico y la imputación; no obstante, con el desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre la materia, se establece un tercer elemento consistente en el nexo de causalidad o relación entre el daño y la acción u omisión que se imputa a la administración.

#### **3.2.1. Del daño antijurídico.**

Con relación al daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad del Estado, se ha establecido que tal noción, concierne a aquella carga que la víctima no estaba obligada a soportar, frente a este, el Consejo de Estado ha expresado lo siguiente:

***“[...] El daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos elementos: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la ocupación material del inmueble por una población específica) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada. De allí que, el daño antijurídico lejos de ser un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico se transforma para convertirse en una institución deontológica o axiológica, pues sólo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (artículo 16 de la ley 446 de 1998) y, por lo tanto, sólo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga [...]”<sup>7</sup>(subraya y negrilla fuera del texto original)***

También, la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha indicado que para que se pueda hablar de la existencia de un daño, se debe establecer que éste es i) antijurídico, ii) cierto y iii) personal. Sobre el particular, el Alto Tribunal ha señalado lo siguiente:

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Sentencia Cinco (5) de julio de dos mil doce (2012). Rad. (21928) Consejero ponente: Enrique Gil Botero.

*“El daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido en el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo depreca, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar o debatir el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.”<sup>8</sup>*  
(negrilla y subraya fuera de texto)

Ahora, desde el punto de vista doctrinal, el tratadista Juan Carlos Henao define el daño como “[...] *toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátase de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o colectivos, que se presentan como la lesión definitiva de un derecho o la alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de responsabilidad civil – imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos[...]*”<sup>9</sup>

En este orden de ideas, el daño es entendido como una alteración que afecta negativamente, a la órbita de un individuo en lo físico o material, esto a la luz del contenido normativo y el desarrollo jurisprudencial del mismo, pues es claro que no toda alteración alegada por el sujeto, debe ser considerada como daño, dentro de un escenario jurídico.

### **3.2.2. De la imputación como elemento de la responsabilidad del Estado.**

Frente a la imputación como elemento constitutivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, esta es definida como como la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública causante del daño antijurídico sufrido, por ser esta la generadora del mismo; con relación a este, la Corte Constitucional ha señalado:

*“[...] el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible<sup>8</sup>. Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de*

<sup>8</sup> Consejo de Estado - Sección Tercera. Sentencia del 1º de febrero de 2012. Expediente: 2092767 05001-23-25-000-1996-00410-01 (21466). M.P. ENRIQUE GIL BOTERO.

<sup>9</sup> Henao, Juan. La Responsabilidad extracontractual del Estado ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta dónde? Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, pág. 35

acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano [...]<sup>10</sup> (subraya fuera de texto)

Con respecto a este elemento de la responsabilidad del Estado, el H. Consejo de Estado, ha dicho lo siguiente:

*“(...) en cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional) (...)”*

Analizado lo anterior, puede colegirse que la imputación exige analizar como primera medida el ámbito fáctico y la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico. La imputación establece la obligación de responder por parte del Estado, bajo cualquiera de los títulos de imputación, bien sea de: falla en el servicio, riesgo excepcional o daño especial.

Así las cosas, para poder atribuir responsabilidad patrimonial alguna al Estado, es necesaria la concurrencia de los elementos antes enunciados; es decir debe existir un daño y la antijuridicidad del mismo, debe ser imputable a la administración, a través de, un nexo de causalidad entre estos.

### **3.2.3. Del nexo de causalidad**

En lo que tiene que ver con la relación de causalidad adecuada o determinante entre el daño antijurídico alegado y la imputación del mismo a la administración, la máxima autoridad en materia contencioso administrativo se ha pronunciado así<sup>11</sup>:

“El elemento de responsabilidad “nexo causal” se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico. Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: la equivalencia de las condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de causalidad adecuada, en la cual el daño se tiene causado por el

<sup>10</sup> Al respecto puede consultarse: Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001

<sup>11</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, c.p.: María Elena Giraldo Gómez, sentencia del 11 de diciembre de 2002, Radicación número: 05001-23-24-000-1993-00288-01 (13818).

*hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo, la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce. De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión de la cadena causal hasta el infinito”<sup>12</sup>.(subraya y negrilla fuera de texto original)*

En otra oportunidad, se indicó<sup>13</sup>:

*“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño [...]”<sup>14</sup>.*

Teniendo en cuenta lo anterior, al punto de evaluar la responsabilidad de la administración debe establecerse la relación de causalidad. En esa medida, en aras de establecer la existencia del nexo causal, es necesario determinar si la conducta imputada a la Administración fue la causa eficiente y determinante del daño que dicen haber sufrido quienes deciden acudir ante el juez, con miras a que les sean restablecidos los derechos conculcados.

### **3.3. Juicio de responsabilidad del Estado - Caso Concreto**

#### **3.3.1. De los problemas jurídicos que deberá resolver la judicatura.**

Corresponde al señor Juez, determinar:

¿se produjo un daño antijurídico a los demandantes con las lesiones de la señora Daniela Ramírez Hurtado, con ocasión de los hechos acaecidos el 22

<sup>12</sup> Sentencia proferida el día 25 de julio de 2002. Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 13.680.

<sup>13</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, c.p.: Gladys Agudelo Ordóñez, sentencia del 27 de abril de 2011, Radicación número: 85001-23-31-000-1999-00021-01(19155).

<sup>14</sup> Nota original de la providencia citada: TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol 2., Santafé de Bogotá, 1996. pp. 245, 246.

de enero de 2021 en la calle 62 con carrera 1J del barrio Los Guayacanes, ubicado en la comuna 5 del municipio de Santiago de Cali?;

Si al problema anterior se responde afirmativamente:

¿cabe imputar fáctica y jurídicamente dicho daño antijurídico a las entidades demandadas el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, o ha operado alguna de las causales eximentes de la responsabilidad, ¿o se produjo una concurrencia de culpas?;

Si al problema anterior se responde imputando la responsabilidad a las demandadas:

¿cabe reconocer a los demandantes los perjuicios que derivados del daño antijurídico se produjeron por concepto de perjuicios morales, fisiológicos y lucro cesante?;

y, finalmente, con base en la anterior respuesta:

¿cabe exigir a las demandadas pago lo que se llegare a ordenar como condena a indemnizar?

Así las cosas, con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el presente libelo de demanda, se analizará la demostración de todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad del estado, sobre los cuales se discurió en las líneas precedentes, esto, con el fin de establecer un margen y/o escenario de responsabilidad de las accionadas en el caso concreto, que en últimas le otorgue al señor juez, claridad para acceder a las súplicas que enmarcan la causa petendi en el *sub lite*.

### **3.3.2. El daño**

Respecto de este elemento, la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico, el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Para el caso concreto, la judicatura encontrará acreditado el daño padecido por la señora Daniela Ramírez Hurtado, dado que, las pruebas que se allegan para que obren en el expediente, se verifica que sufrió un accidente tránsito el día 22 de enero de 2021, al caer en un hueco de la calle 62 con carrera 1 J, ubicado en el barrio Los Guayacanes de la comuna 5 del municipio de Santiago de Cali, lo que conllevó a que sufriera lesiones, con la culpa anónima de la administración municipal de la ciudad de Santiago de Cali, que con su omisión en una falla en el servicio quebrantaron las siguientes disposiciones superiores y legales:

Los artículos 2 y 90 de la Constitución Nacional. El ente público, en el caso sub examine, incurrió en responsabilidad de tipo indirecto que se evidencia en la falla del servicio, en doble aspecto: primero, por cuanto la administración municipal no

efectuó el debido mantenimiento a la vía mencionada en el capítulo de hechos; y segundo, porque aparte de ser un hecho notorio el mal estado de la vía, la administración municipal no señalizó el peligro que significa transitar por esta vía, en especial para los vehículos motorizados de dos ruedas.

**Dichos medios de prueba corresponden a:**

- Informe Policial en Accidente de Tránsito No. A001113940 de fecha del 22 de enero de 2021, elaborado por el agente de tránsito de placa No. 192 el señor Gustavo Adolfo Posso Popo, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.517.995, quien de acuerdo a sus funciones funge como policía judicial de conformidad con el Artículo 205 del Código de Procedimiento Penal.
- Reporte de historia clínica de la ambulancia No. 41485 de fecha del 22 de enero de 2021, en el cual se registra por parte de la paramédico Jenny Lozano y el conductor Anderson Burbano, quienes brindaron el servicio de urgencia médica en el lugar del accidente a la señora Daniela Ramírez Hurtado.
- Historia Clínica de la señora Daniela Ramírez Hurtado, quien fue atendida en la Clínica Cristo Rey de la ciudad de Cali.
- Omisión en la falla del servicio evidenciadas en las Actas de Reunión del comité de planeación de la comuna 5 del municipio de Santiago de Cali, Valle:
  - Acta No. 4173.405.1.14.006 de fecha del 13 de marzo de 2018.
  - Acta No. 4173.405.1.14.010 de fecha del 10 de abril de 2018.
  - Acta No. 4173.405.1.14.14 de fecha del 28 de octubre de 2020.
- Omisión en la falla del servicio evidenciada en los formatos de Sistema de Gestión y Control Integrados – Instrumento de Identificación de problemáticas territoriales por instancia de participación - año 2019 – Junta de acción comunal del barrio Los Guayacanes, Junta de acción comunal del barrio Villa de Veracruz, parque barranquilla, Unidades residenciales, sector norte comuna 5, comité de planeación del municipio de Santiago de Cali, Valle.
- Omisión en la falla del servicio evidenciada en el acta de la Junta Administradora Local comuna 5, sesión extraordinaria realizada el día 13 de junio de 2019.

**3.3.3. La imputación del daño a los demandados**

Establecido el primer elemento de la responsabilidad, el suscrito representante judicial abordará el análisis de la imputación, con el fin de determinar que los perjuicios –materiales e inmateriales- causados a los accionantes, nos llevan a aseverar que en este caso se presentó lo que la doctrina ha dado en llamar “falta de previsibilidad de lo previsible”, al olvidar las consecuencias que puede acarrear una omisión por el mal estado de las vías, generándose en consecuencia la falla del

ente estatal, como está secuencialmente señalado en los supuestos fácticos de la demanda.

Es incuestionable, entonces, que el daño sufrido por la señora Daniela Ramírez fue causado por una falla de la administración y de las demás entidades convocadas, al encontrarse la carretera deteriorada con un gigantesco hueco y ante la ocurrencia frecuente de accidentes de tránsito en la calle 62 con carrera 1 J de la ciudad de Cali, la emisora radial Tropicana de la ciudad de Cali, marco el hueco como zona de peligro, como se puede evidenciar en las fotos tomadas el día 6 de marzo del 2021, en las imágenes se observa el mal estado de la vía, siendo esto también un factor que imposibilita transitar con seguridad por la calzada vial.



1. Fotografía de la Calle 62 con carrera 1 J de la ciudad de Cali (Valle), tomada un (1) mes después de ocurrido el accidente de Tránsito.

2. En la fotografía se observa el tamaño del hueco, y que para tomar la foto visualizar el hueco toco poner una luz externa que no corresponde al alumbrado público.

Cabe destacar que la advertencia de peligro que se evidencia en la fotografía no cumple con la reglamentación de señalización requerida por el Código nacional de tránsito para evitar siniestros viales y el anuncio que indica peligro en la zona tampoco fue realizado por la autoridad competente. También es importante mencionar la poca iluminación en la vía.









Imágenes tomadas de la red social de Facebook de la emisora Tropicana Cali.

Respecto al caso sub-examine, se consultó al Manual imperante de señalización expedido por el Ministerio de Transporte de la República de Colombia, siendo este la autoridad legal y que dentro de sus atribuciones le corresponde al Ministerio de Transporte, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 769 de 2002 reglamentar las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial. La misma norma le fija al Ministerio de Transporte la responsabilidad de determinar los elementos y los dispositivos de señalización necesarios en las obras de construcción (parágrafo del artículo 101), las señales, barreras, luces y demarcación en los pasos a nivel de las vías férreas (artículo 113) y la reglamentación del diseño y la definición de las características de las señales de tránsito, su uso, su ubicación y demás características (artículo 115).

Por otro lado, se tiene que una descentralización de poder, es decir, que el Ministerio de Transporte funde como una entidad de orden Nacional de la cual emana directrices y que los encargados de distribuir dichas directrices son los organismos de tránsito de cada jurisdicción del territorio nacional, no sin antes advertir que respecto a las señales de tránsito solo existe una orden, un solo procedimiento y una sola regla que deberá ser aplicada en toda la nación.

Es así que, respecto a su aplicación y cumplimiento, se expondrá artículos del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), los cuales manifiestan que de las reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Transporte, será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción (artículo 5º de la Ley 769 de 2002).

*“Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control del tránsito, que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción.”*

(Ley 769/02, artículo 115, parágrafo 1º). “En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural, será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.” (Ley 769/02, artículo 115, parágrafo 2º).

Que en el caso en concreto, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen al fatídico accidente de tránsito, ya conocido, se resaltara las señales de tránsito legalmente reconocidas que tuvieron que permanecer en el sitio de la colisión, con el fin de evitar accidentes que pongan en peligro la vida e integridad del tránsito y que al no existir estas se constituye como una omisión y flagrante vulneración a la Ley 769 de 2002 por parte de los hoy demandados, resultando esta imprevisión en el fatal accidente de la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO el día 22 de enero de 2021.

Frente al tema de la visibilidad de las señales de tránsito y lograr la misma forma y color tanto en el día como en la noche, los dispositivos para la regulación del tránsito deben ser elaborados preferiblemente con materiales reflectivos o estar convenientemente iluminados, la carga de responsabilidad resulta atribuible al

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ante la falla del servicio, como se evidencia en: las Actas de Reunión del comité de planeación de la comuna 5 de Cali, en los formatos de Sistema de Gestión y Control Integrados – Instrumento de Identificación de problemáticas territoriales por instancia de participación - año 2019 – Juntas de acción comunal de la comuna 5 de Cali, en medios de comunicación local como la emisora Tropicana Cali, que ante la gran magnitud de accidentes de tránsito que ocurren por el mal estado de la malla vial en la ciudad de Cali, han asumido la labor social de visualizar e identificar los huecos.

El día 30 de marzo de 2022, el alcalde JORGE IVAN OSPINA, reconoce en publicación de Facebook, la omisión del municipio y la labor desempeñada por la emisora Tropicana, ante la falta y ausencia del Estado, y que apenas para dicha fecha la alcaldía está adelantando el proceso contractual para rehabilitar las vías de la ciudad de Cali.



Imagen tomada del Facebook oficial del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina. [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid0NaEaH1LdQV9Wgk6h2FT7SGrUi3rZ4QiqEZA9Aerq3HsWBDd1xHKAG2UFhQECyNMI&id=171251403059325&mibextid=Nif5oz](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NaEaH1LdQV9Wgk6h2FT7SGrUi3rZ4QiqEZA9Aerq3HsWBDd1xHKAG2UFhQECyNMI&id=171251403059325&mibextid=Nif5oz)<sup>15</sup>

El análisis que los jueces han hecho sobre esa privacidad es que se trata de una red social PÚBLICA por lo que exigir respeto a la privacidad e intimidad sería reprochable y contradictorio. Esa falta de privacidad hace que al sustraer información de una red social no se viole ningún derecho fundamental y por ende no se contamine de ilicitud la respectiva prueba.

<sup>15</sup> La presente publicación de Facebook se toma conforme a lo establecido en la Ley 527 de 1999. Esto se logra poniendo al archivo electrónico en un código algorítmico hash.

En lo que respecta a Facebook, la “privacidad” de un usuario no es tan “privada”. Al momento de crear la cuenta, el usuario transfiere la titularidad de su información como lo es en este momento las publicaciones realizadas por el alcalde de Santiago de Cali, el Doctor Jorge Iván Ospina, son públicas y no vulneran el derecho a la intimidad y privacidad del usuario por ser una persona pública que utiliza sus redes sociales para informar a los ciudadanos de las actividades, labores y el desempeño de la gestión pública que desarrolla.

Conforme a lo anterior; el CGP, en el artículo 246, da el valor probatorio a las copias, y reza: *“Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”*.

Valor probatorio de los pantallazos o impresiones, también es posible presentar los perfiles impresos. El artículo 247 del Código General del Proceso (CGP) establece que el juez deberá valorar como documentos los mensajes de datos presentados de esta forma. La impresión podría ser en papel o en PDF o JPG. Al respecto, quiero citar un importante pronunciamiento que aclara la posición que deberá tener el juez.

## **ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD APLICABLE.**

El análisis del régimen de responsabilidad aplicable al caso sub lite, debe abordarse bajo el título de imputación de la **falla del servicio**, pues al respecto, el consejo de Estado ha sostenido lo siguiente<sup>16</sup>:

*“En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligatorio que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En este sentido, se ha sostenido que la*

*«...responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la Policía Vial] (...) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.*

*Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la sala en sentencia del 5 de agosto de 1.994 (exp. 8487, actor VICTOR JULIO PARDO, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:*

---

<sup>16</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de marzo 8 de 2007, rad 27434.

**"1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.**

(...)

**2.- Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.**

*"La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella **debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente"**".<sup>17</sup> (negrilla y subraya fuera de texto original)*

Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, se procederá a analizar las pruebas que se allegan, para establecer que el daño sufrido por los demandantes es atribuible a las entidades demandadas, a título de falla del servicio, véase:

### **3.3.3.1 Obligación de construcción, administración, mantenimiento y adecuación de las vías de la ciudad de Cali.**

Para establecer si las entidades demandadas son responsables de la conservación, el mantenimiento y adecuación de las vías dentro del perímetro de la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca, y tiene la connotación de espacio público, por ser un área destinada al paso de personas o vehículos que van de un lugar a otro.

Conforme a lo anterior, por ser un bien de uso público, en tanto es de propiedad de la entidad territorial aquí accionada y por ser una vía de uso público de la comunidad, se encuentra en principio a su cargo el mantenimiento y conservación, lo que resulta también concordante con los lineamientos establecidos en la Ley 769 de 2002:

<sup>17</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de septiembre once de mil novecientos noventa y siete; Consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo; Radicación número: 11764; Actor: Olimpo Arias Cedeño y otros; Demandado: La Nación- Ministerio De Obras, Intra y Distrito Especial De Bogotá.

## Ley 769 de 2002

El Código Nacional de Transito (Ley 769 de 2002), en su artículo 3 establece que los alcaldes son autoridades de tránsito, y el artículo 5 del mismo código establece que *“las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.”*

### **3.4. Deber de Vigilancia y control de la administración frente al desarrollo de obras publicas**

En los términos del artículo 82 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de **“velar por la protección de la integridad del espacio público”** Dicho deber recae en las entidades territoriales para el caso: el Municipio de Santiago de Cali – Valle del Cauca, el cual adopta medidas en materia de espacio público a través del Plan de Ordenamiento Territorial, esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3. de la Ley 388 de 1997:

*ARTÍCULO 3.- Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:*

*1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.*

Ahora bien, se presenta una falla del servicio cuando se produzca un daño ocasionado con la inobservancia de las obligaciones del Estado. En consecuencia, cuando se presente un daño como derivación de un incumplimiento de los deberes de vigilancia y control de las actividades de construcción, el municipio tiene el deber de indemnizar.

En el caso concreto, la administración municipal de Santiago de Cali – Valle del Cauca, era plenamente consciente de este deber de vigilancia y control la realización de las obras que se deben desarrollar en la ciudad para el mantenimiento de la malla vial.

En algunos eventos, la jurisprudencia contencioso-administrativa ha sido clara en advertir que el ente territorial tiene el deber jurídico de velar por la integridad de las vías públicas de su jurisdicción. El incumplimiento de este deber de velar por la señalización de obras públicas realizadas en las vías, genera la obligación indemnizatoria del Estado, como lo ha advertido el Consejo de Estado al manifestar que:

**“(…) los accidentes de tránsito causados por la falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de la vía que se encuentra obstruida, obstaculizada o afectada con motivo de la realización de una obra pública, reparación o cambios transitorios, ha indicado que los daños que se deriven de estos le son imputables al Estado siempre que se verifique que la entidad encargada de dichos deberes no controle o vigile la ejecución de las**

**obras, como tampoco el normal y adecuado tránsito de la ruta correspondiente”<sup>18</sup>.**

Adicionalmente, en otra providencia advirtió que:

**“La obligación del municipio de Cúcuta de mantener en buen estado su red vial conlleva a (sic) señalar que debió tomar acciones para informar a los conductores de las imperfecciones en la vía. Sin embargo, no fue así, al punto que no se contaba con algún tipo de señalización y tampoco con buena iluminación. [...] Así las cosas, el volcamiento del camión que produjo la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero no fue un suceso imprevisible e irresistible para el municipio demandado. [...] Por esta razón, se deberá confirmar la sentencia objeto de la consulta que declaró al municipio de Cúcuta, a título de falla en el servicio, responsable por la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero”<sup>19</sup>.**

En los términos de la jurisprudencia reseñada, el peligro ocasionado por la ausencia de señalización en las obras desarrolladas, en este caso sea suficiente el concepto que antecede para sostener con fundamento, que el hecho dañoso es imputable únicamente al Estado, en cabeza de uno de sus órganos, sin que exista causa exonerativa de responsabilidad porque el daño no se produjo por culpa de la víctima, ni por la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que sirvieran de fundamento para hablar con certeza del acaecimiento de un hecho imprevisible.

La forma cómo ocurrió el accidente de tránsito y las circunstancias de ésta, ubican la responsabilidad, al configurarse los siguientes elementos axiomáticos:

- a) El hecho generador de la falla del servicio de la administración, plenamente establecido con los argumentos que anteceden.
- b) El daño cierto, las lesiones personales sufridas por la conductora de la moto, que implicó un suceso irreversible ya que causó perjuicios en la calidad de vida.
- c) La relación de causalidad entre la falla del ente público y el daño cierto.

Inequívocamente, la actitud de la administración fue la causa eficiente del daño sufrido por la señora Daniela Ramírez Hurtado; en el fondo, lo que se evidencia es la relación de causa entre la falla en el servicio y el daño causado, como se probará fehacientemente.

En consecuencia, resulta imputable al municipio de Santiago de Cali – Valle del Cauca, la reparación de los daños ocasionados a los accionantes con las lesiones que sufrió la señora Daniela Ramírez Hurtado en los contornos facticos ampliamente discurridos en el presente libelo.

<sup>18</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 1 de agosto de 2016, exp. 36011.

<sup>19</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 3 de agosto de 2017, exp. 41254.

### 3.4.1. Fundamento de la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que *“las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”*.

La carta magna dice:

*“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*

*En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”*

La última parte del primer inciso del Artículo 90 Constitución Política, hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas.

Nuestra Constitución Política en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un **daño antijurídico** que le sea **imputable**.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad, son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que:

*"permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público".*<sup>20</sup>

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de

---

<sup>20</sup> Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp.10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.

**justicia, equidad, solidaridad**, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los *daños antijurídicos*.

La Responsabilidad del Estado en Colombia surge en virtud de diversos títulos de imputación como son: La falla en el servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, todas estas teorías encaminadas a que el Estado responda patrimonialmente por acción u omisión de sus autoridades que causen un daño antijurídico a los administrados.

El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad.

### **3.4.2. De la Reparación Directa.**

El artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 establece lo siguiente con relación al medio de control de reparación directa:

*“Art. 140.- En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, **la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.***

*De conformidad con el inciso anterior, **el Estado responderá**, entre otras, **cuando la causa del daño sea** un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma...”* (Subrayas y negritas fuera de original)

## **3.5. De las eximentes de responsabilidad del Estado**

### **3.5.1. Caso fortuito o fuerza mayor.**

En lo que respecta a la configuración de una fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, es preciso destacar que esta debe corresponder a un hecho externo y ajeno a la administración demandada, además de irresistible para esta; elementos que no se verifican en el presente caso, por cuanto se trató de un hecho que según se probó era evitable por parte de la administración, mediante una debida utilización de los medios coercitivos de los que esta provista para el ejercicio de su función; sin embargo, fue esta misma la que en un ejercicio imprudente de su poder, omitió las condiciones de riesgo que facilitaron la concreción del daño alegado.

En este punto, vale la pena resaltar las diferencias que la jurisprudencia de del H. Consejo de Estado ha señalado entre la fuerza mayor y el caso fortuito, en los siguientes términos:

*“[...] En este punto cabe precisar la diferencia entre la causal eximente de responsabilidad por la fuerza mayor y el caso fortuito que no tiene esa virtualidad. La fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de responsabilidad se equiparán en el derecho privado, mientras que el administrativo les tiene demarcado sus efectos, y ello hace que no se refiera a estas dos hipótesis indistintamente. Varios han sido los criterios ensayados en la jurisprudencia con base en la doctrina sobre la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor. Así, se ha dicho que: (i) el caso fortuito es un suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño; mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad; (ii) **hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida; (iii) la esencia del caso fortuito está en la imprevisibilidad, y la de la fuerza mayor en la irresistibilidad, y (iv) el caso fortuito se relaciona con acontecimientos provenientes del hombre y la fuerza mayor a hechos producidos por la naturaleza.** De manera más reciente ha insistido la Sala en la distinción entre fuerza mayor y caso fortuito basada en el origen de la causa. De este modo, mientras se demuestre por la parte actora que en el ejercicio de una actividad de las calificadas de riesgo o peligrosas, se le causó un daño que proviene del ejercicio de aquellas, el caso fortuito no podrá excluir o atenuar la responsabilidad de la persona pública, ya que se parte de que el evento ocurrido tiene un origen interno al servicio, la actuación o la obra pública. No ocurre lo mismo cuando la causal eximente que se alega es la fuerza mayor, cuyo origen es extraño, externo a la actividad de la administración, el cual sí constituye eximente de responsabilidad [...]”<sup>21</sup>*

Desde esa perspectiva, tratándose de un evento que ocurrió ante el conocimiento de la demandada es claro que el resultado final era posible de evitar, porque como está probado, la administración sí estuvo en condiciones de preverlo al tener conocimiento del mal estado que presentaba la vía, por lo que no puede operar dicha causal para exonerarla de responsabilidad.

### **3.5.2. Culpa exclusiva de la víctima.**

Para que opere la causal eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de la víctima o culpa exclusiva de la víctima, es necesario establecer si su proceder, ya sea activo u omisivo, tuvo injerencia o no y en qué medida en la producción del resultado lesivo, pues para que esta exonere plenamente de responsabilidad es necesario acreditar que la actuación de la víctima fue la causa eficiente y determinante del daño.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de agosto de 2007, exp. 15.494, M.P. Ruth Stella Correa Palacio

<sup>22</sup> En ese sentido, resulta importante precisar que en los casos en los cuales se alegue el hecho exclusivo de la víctima como causal eximente de responsabilidad, como lo ha aceptado la jurisprudencia del consejo de Estado, no se requiere para su configuración la demostración de su irresistibilidad e imprevisibilidad, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño. Al

Al respecto, precisa este apoderado que, no se acredita que la señora Daniela Ramírez Hurtado, hubiera desplegado conducta alguna que, hubiera propendido por la materialización del daño, pues como encontrará probado la judicatura, el pasado 22 de enero de 2021 siendo aproximadamente las 20:45 horas, en la calle 62 con carrera 1 J, la señora Ramírez se encontraba manejando su vehículo motocicleta de placa BKZ-87D, Línea AK110 NV, de Cilindraje cc107, siendo importante mencionar que el cilindraje de este tipo de motocicletas no es de alta velocidad, y que en dicho momento la señora Ramírez se desplazaba para su hogar a reencontrarse con su familia, después de haber cumplido con su jornada laboral, también es importante resaltar que al momento del accidente de tránsito la señora Ramírez, no presentaba estado de alicoramiento, siendo evidente que las condiciones del mal estado de la malla vial del Municipio de Santiago de Cali – Valle del Cauca, fue lo que generó el accidente de tránsito–daño antijurídico–; Por lo tanto, no puede predicarse que este tuvo una injerencia directa en la producción del daño.

### **3.5.3. Hecho de un tercero.**

Con relación al hecho de un tercero, se tiene como exigencia que la causa (la actuación del tercero) sea adecuada frente a la producción del daño. También se indica que corresponde a la entidad demandada probar los elementos constitutivos de este eximente de responsabilidad.

Ahora bien, como consecuencia de lo expresado, en el presente caso no podría predicarse que aparece configurada dicha causal, habida cuenta de que la declaratoria de responsabilidad que se pretende, recae directamente en las demandadas y no parte de la determinación del causante del daño, como un sujeto ajeno a la administración.

Así las cosas, el hecho de un tercero, exculparía a la administración sólo si se reúnen las mismas características de imprevisibilidad e inevitabilidad; sin embargo, en el presente asunto no es posible predicar concurrencia de las mismas, por cuanto, como se dejó zanjado, la causa eficiente del daño obedeció al actuar anómalo e irregular de las entidades en el ejercicio de sus funciones que por ley le son encomendadas.

## **CAPITULO 4. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LOS PERJUICIOS MATERIALES E IMATERIALES.**

Antes de abordar el contenido del presente acápite, ha de solicitarse al honorable Fallador, tener en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional, en lo referente al precedente judicial, tal y como lo indica la sentencia T- 441 de 2003<sup>23</sup>

*“[...] el desconocimiento del precedente, torna inconstitucional la decisión judicial, por cuanto desconoce los principios de igualdad y seguridad, aunque los jueces ordinarios gozan de un razonable margen de apreciación, cuya*

---

respecto pueden consultarse las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 17042. C.P. Enrique Gil Botero; reiterada, entre otras, en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, exp. 31087. C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de mayo de 2017, exp. 40257 y del 19 de abril de 2018, exp. 41766.

<sup>23</sup> Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett

*intensidad es mayor frente a los asuntos fácticos y decrece frente al propio precedente y termina en la sujeción al precedente de los órganos de cierre y al que, en materia constitucional, fije la Corte Constitucional [...]” (negrilla y subraya fuera de texto original)*

Se insiste en la aplicación del precedente jurisprudencial vigente, para que en este evento se concedan los máximos jurisprudenciales señalados para los perjuicios:

#### 4.1 Perjuicios Morales

El Consejo de Estado en su jurisprudencia, ha indicado respecto del concepto de perjuicio moral que este: *“se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”*<sup>24</sup>.

En la sentencia del 28 de agosto de 2014 Exp. No. 26251128, el Consejo de Estado estipuló que excepcionalmente, estos topes indemnizatorios, podían incrementarse en casos de graves violaciones a derechos humanos, pero en todo caso, sin superar el triple del tope indemnizatorio fijado, esto siempre y cuando exista la debida motivación probatoria para acceder a tal medida. Al respecto señaló el Consejo de Estado lo siguiente:

*“[...] 2. PERJUICIO MORAL*

*El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc. Que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”*

#### **2.4 REGLAS DE EXCEPCIÓN PARA TODOS LOS CASOS DE DAÑOS**

*MORALES En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño [...]” (Subrayado propio)*

Por otro lado, respecto de la acreditación para el reconocimiento del perjuicio moral, la mencionada providencia es clara al señalar que para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros y para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva. **Así las cosas, el perjuicio moral de los familiares en el primer y segundo grado de consanguinidad se presume.**

Daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados– Medidas de justicia restaurativa.

<sup>24</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 14 de agosto de 2014, exp. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

No puede olvidarse que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, reconoce sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5 de la Constitución Política) y, por lo mismo, la Constitución señala dentro de los fines del Estado el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos, a la vida, que como valor es un bien constitucionalmente relevante (Preámbulo y artículo 11 ibídem).

Con la trágica situación a la que fue expuesta la señora Daniel Ramírez Hurtado (lesionada) por cuenta de las entidades demandadas, se exterioriza la clara violación de derechos de rango Constitucional como lo es el derecho a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana, de los cuales resulta pertinente citar textualmente según lo plasmado en nuestra Carta Política, así:

#### **“PREÁMBULO**

*El pueblo De Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad [...]*  
**ARTICULO 1o.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

[...]

**ARTICULO 5o.** El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

[...] **ARTICULO 11.** El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. [...]

**ARTICULO 13.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.*

*Concordancias.*

*El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.*

[...]

**ARTICULO 43.** La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. [...]” (Resaltado fuera del texto).

De igual manera, en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece lo siguiente:

*Artículo 4. Derecho a la Vida*

*1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.*

Escenario que, causa el respectivo perjuicio que, evidentemente debe ser reparado. Medidas de justicia restaurativa que se encuentran plenamente fundamentadas en la mencionada sentencia de unificación de Sala Plena del 28 de agosto de 2014, en la cual se sostuvo que esta clase de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. En esa oportunidad se precisó por el H. Consejo de Estado:

*El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. // ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. // iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente Reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular. // iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.*

*La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:*

*i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial. // ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia. // iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la*

víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. // iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.// v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el *debitum iuris*. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobando las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. // vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

*En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que, en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado. (Resaltado fuera de texto).*

En consecuencia, de lo expuesto hasta el momento, queda en evidencia la clara vulneración de los derechos de rango constitucional y como existe la obligación de indemnizar los mismos de manera separada al constituirse en una nueva categoría de perjuicios, aclarando que tal como lo señaló el H. Consejo de Estado en sentencia del 5 de marzo de 2015, Sección Tercera, Radicación número 05001233100020040361701 (37310 Consejero Ponente Ramiro Pazos), "los 100 SMLMV NO SON SOLO PARA LA VÍCTIMA DIRECTA SINO PARA SU NÚCLEO FAMILIAR".

## 4.2. Por daños a la salud.

Se solicita la indemnización de este daño a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar con base en el daño físico y psicológico infringido a estos por parte del actuar anómalo y omisivo en que incurrieron las demandadas.

Frente al daño a la salud, ha manifestado el Consejo de Estado en la Sentencia CE-2014-0828129, que:

*“[...] el concepto de salud no se limita a la ausencia de enfermedad, cabe comprender dentro de éste la alteración del bienestar psicofísico debido a condiciones que, en estricto sentido, no representan una situación morbosa, como, por ejemplo, la causación injustificada de dolor físico o psíquico (estados de duelo). Y es que, en efecto, el dolor físico o psíquico bien pueden constituirse, en un momento dado, en la respuesta fisiológica o psicológica normal a un evento o circunstancia que no tenía por qué padecerse. En conclusión, se puede decir que se avanza a una noción más amplia del daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación sobre la magnitud de la misma. [...]”*

Este perjuicio, se soporta en el sufrimiento al que fue expuesta la señora Daniela Ramírez Hurtado a causa de las graves lesiones ocasionadas al caer como consecuencia del hueco en la vía que no contaba con la debida señalización del peligro y la oscuridad de la zona en la calle 62 con carrera 1J del municipio de Santiago de Cali, provocándole un trauma contundente a nivel de la rodilla derecha con posterior edema y dolor limitación funcional, tal y como se prueba con el protocolo de necropsia que se aporta con el presente libelo de demanda.

Así las cosas, se solicita este perjuicio a favor de la víctima directa y su núcleo familiar, toda vez que al realizar la adaptación correspondiente a la comentada jurisprudencia, debe entenderse que lo solicitado, encuadra perfectamente en lo que la Jurisprudencia del Consejo de Estado reconoce o identifica como daño a la salud, como quiera que está dirigido a resarcir económicamente las lesiones psíquicas que pudieron sufrir los mencionados con ocasión de las lesiones sufridas por la señora Daniela Ramírez Hurtado.

## **CAPITULO 5.** **DECLARACIONES Y CONDENAS.**

Atendiendo la situación fáctica descrita, las razones de hecho y de derecho, así como los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos con antelación, muy comedidamente se solicita a los señores Jueces de lo Contencioso Administrativo, despachar favorablemente las siguientes súplicas:

**5.1.:** Que se Declare a el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** son **ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES** y se obtenga el reconocimiento y pago total de los daños y perjuicios que fueron ocasionados a la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO** (Lesionada),

**NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO** (Compañero permanente de la lesionada), quienes obra en nombre propio y en representación del hijo menor **JUAN ESTEBAN BEDOYA RAMIREZ** (hijo de la lesionada), por falla o falta del servicio o de la administración que condujo a que la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, sufriera graves lesiones como consecuencia de los hechos acaecidos el día 22 de enero de 2021, en la calle 62 con carrera 1 J a las 20:45 horas, durante el desarrollo de la actividad de conducir por las vía del municipio de Santiago de Cali – Valle, representadas por las entidades convocadas, en una evidente responsabilidad objetiva.

**5.2.:** Que se declare que, como consecuencia lógica de la anterior declaración, condénese a el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** a pagar:

**5.2.1. PERJUICIOS MATERIALES - DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y LUCRO CESANTE FUTURO:**

Se solicita que se condene a las entidades demandadas El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, a pagar indemnización por lucro cesante consolidado y futuro a favor de la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, o a quien sus derechos represente al momento de la conciliación o el fallo, las cantidades que por concepto de perjuicios materiales se prueben dentro del presente proceso, los cuales se liquidaran en la proporción que ha determinado la jurisprudencia, conforme a pretérito pronunciamiento del H. Consejo de Estado la valoración del perjuicio irrogados, atendiendo los principios de Reparación Integral y Equidad que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y por lo cual se tasaré así.:

Su fundamento en el caso bajo examen se encuentra en la historia clínica de la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas en su cuerpo, ocasionadas por accidente de tránsito ocurrido por el mal estado de la calle 62 con carrera 1J de la ciudad de Santiago de Cali.

Para la liquidación de este perjuicio se tendrá en cuenta el salario que devengaba la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO para el momento en que ocurrió el accidente de tránsito y se hará la respectiva operación matemática en la que ira involucrado el promedio de vida y se obtendrá como consecuencia directa la suma real de la indemnización por lucro cesante:

a) Promedio de vida probable de 60 años, partiendo que ella nació el día 14 de enero de 1996, es decir con más de cincuenta (50) años de expectativa de vida, según las proyecciones de población 2005-2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

b) El ingreso mensual promedio percibido por la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, hasta antes y en el momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, cuando desempeñaba el cargo de Auxiliar Contable en la empresa **CRIPACK S.A.S.**, era de \$1.173.897, el valor actualmente indexado más el factor prestacional,

equivale a la suma de un millón ochocientos seis mil seiscientos setenta y siete de pesos (\$ 1.806.677.00) mensuales.

c) La calificación de porcentaje de pérdida de capacidad por invalidez expedida por la Junta Regional de Invalidez una vez sea expedida.

d) El tiempo durante el cual se causó el perjuicio hasta el pago de su indemnización, que comprende desde la fecha de los hechos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

e) Los intereses compensatorios desde la fecha de su causación hasta cuando se produzca la indemnización o fallo de sentencia.

### 5.2.2. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO:

Se solicita que se condene a las entidades demandadas EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, a pagar indemnización por lucro cesante consolidado a la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, así:

- De acuerdo con los factores mencionados inicialmente; podría tasarse aproximadamente este perjuicio a favor de la demandante **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (\$49.945.810,00) m/cte.**

La fórmula para obtener el valor del lucro cesante futuro, es la siguiente:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante.

i= Interés puro o técnico: 0,004867.

n= Número de meses transcurridos desde el momento en que se generó el accidente de tránsito.

1= Es una constante.

Reemplazando tenemos:

$$S = \$1.806.677 \frac{(1+0,004867)^{26} - 1}{0,004867}$$

$$S = \$49.945.810$$

### 5.2.3. LUCRO CESANTE FUTURO.

Se solicita que se condene a las entidades demandadas EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, a pagar

indemnización por lucro cesante futuro a la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, así:

De acuerdo con los factores mencionados inicialmente; podría tasarse aproximadamente este perjuicio a favor de la demandante **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, la suma que resulte probada de conformidad con el examen de valoración de pérdida de capacidad por invalidez expedida por la Junta Regional de Invalidez una vez sea expedida.

Así, para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario devengado al momento del accidente de tránsito de (\$1.173.897), el cual será indexado a la fecha de la presente solicitud, ante la falta de cualquier otro elemento de juicio que permita deducir suma distinta para efectuar la liquidación, más el 25% por concepto de prestaciones sociales (\$293.474), lo que da como resultado la suma de \$1.806.677.

La fórmula para obtener el valor del lucro cesante futuro, es la siguiente:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante futuro.

i= Interés puro o técnico: 0,004867.

n= Número de meses transcurridos desde el momento en que se dé procedibilidad para incoar el presente medio de control - hasta la fecha en que la señora Ramírez Hurtado, alcance su expectativa de vida, esto es 720 meses.

1= Es una constante

Reemplazando tenemos:

$$S = \$1.806.677 \frac{(1+0,004867)^{720} - 1}{0,004867(1+0,004867)^{720}}$$

S= Valor de indemnización.

### 5.3. PERJUICIOS MORALES.

**5.3.1.** Que se indemnice por **PERJUICIO MORAL** a la señora **DANIELA RAMÍREZ HURTADO**, el equivalente a **(100) CIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES**, que en pesos a la presentación de la demanda son \$116.000.000, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo, en calidad de víctima directa por las lesiones sufridas en su humanidad.

**5.3.2.** Que se indemnice por **PERJUICIO MORAL** al señor **NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO**, el equivalente a **(80) OCHENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES**, que en pesos a la presentación de la demanda son \$92.800.000, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al

momento del fallo, en calidad de compañero permanente de la víctima la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO.

**5.3.3.** Que se indemnice por PERJUICIO MORAL al menor JUAN ESTEBAN BEDOYA RAMIREZ, el equivalente a **(80) OCHENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES**, que en pesos a la presentación de la demanda son \$92.800.000, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo, en calidad de hijo menor de la víctima la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO.

Las sumas anteriormente mencionadas deberán ajustarse a las cantidades expuestas o en su defecto a lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento de la conciliación o fallo.

Las cantidades anteriormente mencionadas, hacen razón el plano psíquico interno de los individuos, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien, que en el caso concreto afecto ostensiblemente a la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO y su familia; entiéndase familia a los anteriormente mencionados (Hijo y Compañero sentimental ), lo anterior fundamentado en el artículo 2° y 42° de la Constitución Política de Colombia el cual ostenta en su artículo 2° que la Republica de Colombia como Estado social de Derecho que es, tiene como fines esenciales el del servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes consagrados en la misma y de mantener la vigencia de un orden justo. Por su parte el artículo 42° Ibidem, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, el cual se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Así mismo el artículo en mención expone que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

Que, respecto a los montos indemnizatorios para la reparación del daño moral en caso de lesiones, se debe traer a colación los pronunciamientos actuales del Honorable Consejo de Estado, en la cual ha establecido 5 niveles de cercanía afectiva entre la victima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o victimas indirectas.

- Esta representante Judicial, supone que con la indemnización por perjuicios morales establecida y ajustada a las reglas del Honorable Consejo de Estado, los cuales suman un valor de **TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS DE PESOS m/cte \$ 301.600.000**, se repara el daño causado a la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO y su núcleo familiar por el dolor, la aflicción y en general todos los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor y zozobra que padecieron por las lesiones que sufrió la señora DANIELA RAMIREZ, dadas las circunstancias de modo tiempo y lugar en que rodearon el accidente de tránsito, ya que al ser una familia unida que compartían tiempos, momentos y fechas especiales juntos y que como consecuencia del desfortunio que genera no volver a compartir los momentos en familia con la misma vitalidad que se tenía, dejando un vacío grande e irreparable en su hijo y su compañero sentimental.

#### 5.4. PERJUICIOS DEL DAÑO A LA SALUD.

- Que se indemnice por concepto de **DAÑO A LA SALUD** a favor de la demandante la siguiente tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en **CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES** que en pesos a la presentación de la demanda son **\$116.000.000**, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo, para la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**.

Nótese Honorable Juez, que el perjuicio por daño a la salud es un perjuicio extrapatrimonial diferente e independiente del perjuicio moral y material, el cual en el sub lite, teniendo en cuenta las graves afectaciones físicas de la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, ha ocasionado graves daños en la humanidad de mi representada, teniendo en cuenta que como consecuencia de las secuelas físicas que presenta en la actualidad se le ha ocasionado un daño a su integridad y se le ha frustrado entonces su desarrollo físico normal, toda vez que no puede esforzarse fácilmente en las actividades cotidianas y placenteras que realizaba antes del suceso.

Nuestra alta corporación de lo Contencioso Administrativo en cuanto al daño a la salud en sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011) Radicado 1994-00020-01(19031) consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero, refirió:

El “daño a la salud” –esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica– ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (artículo 49 C.P.) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos. Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

De conformidad con la anterior apreciación hecha por el alto Tribunal, resulta entonces procedente es la reparación del daño a la salud referido a la afectación de la integridad psicofísica de la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, encaminada a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que la misma genera. Dicha reparación está dirigida a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación de derecho a la salud de mi representado.

#### 5.5. PERJUICIOS POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN.

Respecto a la indemnización por concepto al **PERJUICIO DEL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN**, a favor de cada uno los demandantes, la siguiente suma de dinero:

**5.5.1.** El equivalente a **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, que en pesos a la presentación de la demanda son \$116.000.000, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo para la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, en calidad de víctima directa por las lesiones sufridas a su humanidad.

**5.5.2.** El equivalente a **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, que en pesos a la presentación de la demanda son \$116.000.000, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo de sentencia para el señor **NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO**, en calidad de compañero permanente en unión marital de hecho con la víctima la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO.

**5.5.3.** El equivalente a **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, que en pesos a la presentación de la demanda son \$116.000.000, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo, para el menor **JUAN SEBASTIAN BEDOYA RAMIREZ**, en calidad de hijo de la víctima la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO.

Respecto a la indemnización expuesta anteriormente, la cual hace razón a la Vida del Daño en Relación, es importante precisar que es aplicable al caso de estudio por cuanto los convocantes no podrán realizar las mismas actividades que realizaba antes en familia, máxime cuando hay en el medio de todo un menor de edad, hijo de la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, quien cuenta a la fecha con diez (10) años de edad y junto con su madre, desde el momento del accidente las actividades desarrollados se han visto limitadas como consecuencia de la lesión sufrida por la víctima, no podrá tener momentos placenteros con su madre que no limiten las actividades en familia, lo que ocasiona este daño respecto a la menor JUAN SEBASTIAN BEDOYA RAMIREZ.

Misma suerte corren el compañero sentimental el señor NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO y la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, pues no podrá seguir con la normalidad de vida que tenía antes, en compañía de su pareja y todo lo que rodea este tipo de situaciones sentimentales.

- Que se declara el pago de indemnización por concepto de daño a la vida en relación, en una suma equivalente de **(100) CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES**, que en pesos a la presentación de la demanda son **\$116.000.000**, o el mayor valor que resulte probado para cada uno de los demandantes: DANIELA RAMIREZ HURTADO, NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO y JUAN SEBASTIAN BEDOYA RAMIREZ.

**5.6.:** Que se condene al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, al pago de intereses moratorios iguales al certificado como bancario corriente por la Superintendencia financiera o quien haga sus veces, a partir del mes siguiente a la fecha de la presentación de conciliación extrajudicial, la radicación de la demanda o la notificación del auto admisorio.

**5.7.:** Condena de intereses moratorios al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, que se debe a cada uno de los demandantes o a quien o quienes sus derechos representaré al momento del fallo, lo que se generen a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

**5.8.:** La condena respectiva será actualizada y se deberá calcular y liquidar de conformidad con la variación del IPC e indexarse desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del fallo de sentencia y fecha efectiva de dicho reconocimiento económico a favor de los demandantes.

**5.9.:** Según el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, condénese a los demandados a cancelar las costas y agencias en derecho correspondientes en los términos del artículo 361 del Código General del Proceso.

**5.10.:** Los demandados darán cumplimiento a la sentencia dentro de los 10 meses siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con el inciso 2. ° del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## **CAPITULO 6.**

### **ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA.**

El numeral 6° del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contenciosos Administrativo -Ley 1437 de 2011-, establece como requisito formal, la exposición razonada y discriminada de la cuantía. Para efectos del presente medio de control de reparación directa, se estima la suma equivalente a 200 SMLMV como pretensión por perjuicios inmateriales, sin que se limite la misma a una mayor suma que resulte probada, tal como lo expone el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

## **CAPITULO 7.**

### **JURAMENTO ESTIMATORIO**

Conforme el literal h del artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 de 2015 y el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), mi poderdante y el suscrito, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la estimación razonada de la cuantía es objetiva de acuerdo con la normatividad vigente. De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que no hemos presentado, hasta la fecha, parecida solicitud ante la justicia contenciosa administrativa, con identidad de violación, hechos y derechos reclamados en la de la referencia.

## **CAPITULO 8.**

### **CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL**

Al tenor de lo previsto en el numeral 2° literal i. del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

En el asunto de marras, el daño antijurídico que se alega tiene su origen por el daño causado a la humanidad de la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.144.191.836 de Cali – Valle, quien el pasado 22 de enero de 2021 mientras transitaba la motocicleta de placa BKZ87D, sufrió accidente tránsito por el mal estado de la malla vial de la calle 62 con carrera 1J, ubicado en zona urbana del municipio accionado, por falla en el servicio y omisión del mantenimiento y adecuaciones de las vías públicas que son responsabilidad y garante del interés común del demandado.

En este orden de ideas los dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño fenecían, el día 22 de enero de 2023.

No obstante, considérese que dicho termino, se suspendió la caducidad mediante la solicitud de la conciliación prejudicial radicada ante la Procuraduría General de la Nación el 18 de octubre del 2022, restando dos (02) meses y veinticinco (25) días para el cumplimiento del plazo legal, cuya constancia de declaratoria fallida fue expedida el día 12 de enero de 2023, por lo tanto el día 13 de enero de 2023 se reanudó el término restante para incoar la correspondiente demanda, luego la parte interesada, (parte demandante) aún podía acudir ante la jurisdicción hasta el 14 de abril de 2023, siendo efectivamente radicada la demanda el día 29 de marzo de 2023.

Para un mayor entendimiento de lo anotado en las líneas que preceden, en el caso concreto se tiene lo siguiente:

Fecha del accidente	22 de enero de 2021
Caducidad de 2 años – CPACA	23 de enero de 2023
Radicación de la solicitud de conciliación y suspensión del término de caducidad.	14 de abril 2023
Tiempo que restaba para la fecha de caducidad.	2 meses y 25 días.
Audiencia de conciliación extrajudicial	12 de enero de 2023.
Expedición del acta de no conciliación	12 de enero de 2023
Fecha de reanudación del término de caducidad.	13 de enero de 2023.
Fecha de presentación de la demanda	29 de marzo de 2023

Por lo tanto, se puede concluir que en el asunto de la referencia no ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad y resulta procedente impetrar el medio de control de la referencia.

**CAPITULO 9.**  
**COMPETENCIA DE LOS SEÑORES JUECES DE LO CONTENCIOSO**  
**ADMINISTRATIVO.**

Para la determinación de la competencia en el presente caso, obsérvese las siguientes consideraciones:

Por el factor de la cuantía, el artículo 157 del CPACA y el numeral 6° ibídem, indican:

*“Artículo 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. [...]*

*“Artículo 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (...) 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia...”*

Además, el artículo 155 ibídem en su numeral 6 dispone:

*“[...] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes [...]*

En lo que tiene que ver con el factor territorial, el artículo 156 –CPACA- en el numeral 6° dispone:

*“[...] 6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante [...]” (se destaca)*

De conformidad con lo anterior, en atención a lo establecido en artículo 156 numeral 6° relacionado ad supra, se tiene a elección de los demandantes como lugar de presentación de presente demanda, la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca, lugar donde se ubica el domicilio principal de la demandada MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; así mismo, considérese que la cuantía de las pretensiones no excede de los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que corresponde a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali, (Reparto) conocer del presente asunto.

## **CAPITULO 10.**

### **DE LAS PRUEBAS Y SOLICITUDES PROBATORIAS.**

#### **Documentales:**

Se aportan formato digital -PDF-, las siguientes:

**Prueba 1:** Copia de las cédulas de ciudadanía de la señora Daniela Ramírez Hurtado y del señor Nolberto Andres Bedoya Giraldo.

**Prueba 2:** Copia tarjeta de identidad del menor Juan Esteban Bedoya Ramírez.

**Prueba 3:** Copia del registro civil de nacimiento de Juan Esteban Bedoya Ramírez.

**Prueba 4:** Declaración Juramentada de convivencia en unión marital de hecho.

**Prueba 5:** Copia del informe policial de accidente de tránsito No. A001113940.

**Prueba 6:** Copia de la Historia Clínica de la señora Daniela Ramírez.

**Prueba 7:** Copia de Historia Clínica No. 41485, realizada por personal de la ambulancia.

**Prueba 8:** Copia del Soat de seguros del Estado No. 14226800011370.

**Prueba 9:** Copia de Tarjeta de propiedad de la Motocicleta de placa BKZ87D.

**Prueba 10:** Copia de certificación laboral de la señora Daniela Ramírez.

**Prueba 11:** Copia del registro fotográfico de la vía.

**Prueba 12:** Copia de fotografías de la lesión de la señora Daniela Ramírez.

**Prueba 13:** Copia del derecho de petición radicado en la ventanilla única de la Alcaldía de Santiago de Cali, de fecha del 13 de febrero de 2023.

**Prueba 14:** Copia del derecho de petición radicado por medio virtual de la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali, de fecha 10 de marzo de 2023.

**Prueba 15:** Publicación de Facebook realizada el día 30 de marzo de 2022, el alcalde JORGE IVAN OSPINA.

**Prueba 16:** Copia de respuesta al derecho de petición radicado virtual el 10 de marzo de 2023.

**Prueba 17:** Acta No. 4173.405.1.14.006 de fecha del 13 de marzo de 2018.

**Prueba 18:** Acta No. 4173.405.1.14.010 de fecha del 10 de abril de 2018.

**Prueba 19:** Acta de la Junta Administradora Local comuna 5, sesión extraordinaria realizada el día 13 de junio de 2019.

**Prueba 20:** Formatos de Sistema de Gestión y Control Integrados – Instrumento de Identificación de problemáticas territoriales por instancia de participación - año 2019 – Junta de acción comunal del barrio Los Guayacanes, Junta de acción comunal del barrio Villa de Veracruz, parque barranquilla, Unidades residenciales, sector norte comuna 5, comité de planeación del municipio de Santiago de Cali, Valle.

**Prueba 21:** Acta No. 4173.405.1.14.14 de fecha del 28 de octubre de 2020.

**Prueba 22:** Copia del Acta de Audiencia de conciliación extrajudicial expedida por la Procuraduría 60 Judicial I para asuntos administrativos, con fecha del 12 de enero de 2023.

**Prueba 23:** Copia de Constancia de Trámite Conciliatorio Extrajudicial Administrativo – conforme audiencia celebrada el 12 de enero de 2023 - Declara fallida la conciliación.

#### **PRUEBAS QUE SE SOLICITARÁN:**

Previo a elevar la solicitud probatoria correspondiente es menester indicar a la Judicatura que atendiendo la carga probatoria que impone el Código General del Proceso en su artículo 167, por parte del suscrito representante judicial se procedió

a radicar derechos de petición ante la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali, el día 13 de febrero de 2023, solicitando:

1. Solicito se sirva suministrar información y copia de los proyectos contractuales que la Secretaria de Infraestructura vial, haya elaborado durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, con el fin de realizar la rehabilitación de la malla vial, en el cual se contemple la reparación de la calle 62 entre carrera 1 D y Carrera 2 de la ciudad de Cali.
2. Solicito copia de los estudios técnicos que la Secretaria de Infraestructura vial, haya elaborado durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, con el fin de realizar la rehabilitación de la malla vial, en el cual se contemple la reparación de la calle 62 entre carrera 1 D y Carrera 2 de la ciudad de Cali.
3. Solicito copia de los contratos para la recuperación de la malla vial que el Municipio de Santiago de Cali, haya desarrollado en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Sin embargo, para la fecha de radicación de la presente demanda aún no se ha obtenido respuesta de los documentos peticionados.

En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de Código General del Proceso, se solicita respetuosamente al señor juez administrativo que ordene lo siguiente:

1. Solicito se sirva suministrar información y copia de los proyectos contractuales que la Secretaria de Infraestructura vial, haya elaborado durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, con el fin de realizar la rehabilitación de la malla vial, en el cual se contemple la reparación de la calle 62 entre carrera 1 D y Carrera 2 de la ciudad de Cali.
2. Solicito copia de los estudios técnicos que la Secretaria de Infraestructura vial, haya elaborado durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, con el fin de realizar la rehabilitación de la malla vial, en el cual se contemple la reparación de la calle 62 entre carrera 1 D y Carrera 2 de la ciudad de Cali.
3. Solicito copia de los contratos para la recuperación de la malla vial que el Municipio de Santiago de Cali, haya desarrollado en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Por secretaria se oficie a la Alcaldía municipal de Santiago de Cali para que remita con destino a este proceso, copia de las solicitudes anteriormente referenciadas con la finalidad de verificar que gestión de reparación ha realizado la Administración Municipal frente al mal estado de la malla vial en la calle 62 con carrera 1J ubicada en la comuna 5 de la ciudad de Santiago de Cali.

Como sustento de lo anterior, se pone de relieve al despacho, lo preceptuado en el artículo 169 del Código General del proceso, que, en lo atinente a las pruebas a petición de parte, dispone lo siguiente:

**“ARTÍCULO 169. PRUEBA DE OFICIO Y A PETICIÓN DE PARTE:**

Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte. o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

*Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas”. (se destaca)*

En virtud de lo anterior, y encontrándose configurados los requisitos establecidos por el artículo 173 del CGP para la procedencia de las solicitudes probatoria, así como los presupuestos de utilidad, pertinencia y necesidad de la misma, el suscrito apoderado estima pertinente que por parte del Despacho se decreten las pruebas enunciadas en los términos solicitados en párrafos anteriores.

**PRUEBA PERICIAL – primer dictamen pericial:**

Sírvase remitir a la señora DANIELA RAMÍREZ HURTADO, a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, Carrera 40 No. 5 A -22 de Cali, a fin de que se determine las secuelas que presenta en la actualidad, así como la pérdida de la capacidad laboral.

**PRUEBA DE PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES.**

Sírvase tener como prueba la publicación realizada por el alcalde JORGE IVAN OSPINA, el día 30 de marzo de 2022, donde reconoce en públicamente en su Facebook oficial, la omisión en la falla del servicio del municipio de Santiago de Cali, teniendo conocimiento de los lugares que marca (señaliza) la emisora Tropicana, ante la falta y ausencia del Estado para rehabilitar las vías de la ciudad.

Imagen tomada del Facebook oficial del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina.  
[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid0NaEaH1LdQV9Wgk6h2FT7SGrUi3rZ4QiqEZA9Aerq3HsWBDd1xHKAG2UFhQECyNMI&id=171251403059325&mibextid=Nif5oz](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NaEaH1LdQV9Wgk6h2FT7SGrUi3rZ4QiqEZA9Aerq3HsWBDd1xHKAG2UFhQECyNMI&id=171251403059325&mibextid=Nif5oz)<sup>25</sup>

Conforme a lo anterior; el CGP, en el artículo 246, da el valor probatorio a las copias, y reza: *“Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”.*

El artículo 247 del Código General del Proceso (CGP) establece que el juez deberá valorar como documentos los mensajes de datos presentados de esta forma. La impresión podría ser en papel o en PDF o JPG. Al respecto, quiero citar un importante pronunciamiento que aclara la posición que deberá tener el juez.

---

<sup>25</sup> La presente publicación de Facebook se toma conforme a lo establecido en la Ley 527 de 1999. Esto se logra poniendo al archivo electrónico en un código algorítmico hash.

Finalmente, cumpliendo el requisito de originalidad contenido en el artículo 8º de la Ley 527 de 1999. Esto se lograría poniendo al archivo electrónico un código algorítmico hash.

### **INTERROGATORIO:**

Se sirva citar a interrogatorio al agente de tránsito de placa No. 192 el señor GUSTAVO ADOLFO POSSO POPO, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía Nro. 94.517.995, domiciliado en la ciudad de Cali, dirección de la Secretaria de Movilidad y Tránsito de Cali, que se ubica en la carrera 3 No. 56 - 30, Cali, Valle, correo electrónico: [gustavo.posso@cali.gov.co](mailto:gustavo.posso@cali.gov.co), quien puede ser citado a través del suscrito, para que declare lo que le consta acerca de los hechos de la demanda y lo que pueda interesar al proceso por ser conocedor directo de los hechos, quien depondrá a cerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y de los perjuicios causados.

### **TESTIMONIALES:**

Para probar los fundamentos de hecho esbozados al inicio de esta petitoria, tales como modo, tiempo, lugar y circunstancia que genero la ocurrencia del accidente de tránsito, entre otros; Respetuosamente se solicita al representante de la Judicatura, decrete como prueba el testimonio de las personas que a continuación relaciono:

- BRYAN PANTOJA SIERRA mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.144.154.496, y domiciliado en la ciudad de Cali, dirección desconocida, correo electrónico: luz.calderon@hotmail.com, quien puede ser citado a través del suscrito, para que declare lo que le consta acerca de los hechos de la demanda y lo que pueda interesar al proceso por ser conocedor directo de los hechos, quien depondrá a cerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y de los perjuicios causados.
  
- CARLOS ANDRES CORTES TIMARÁN, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.144.154.496, y domiciliado en la ciudad de Cali, dirección desconocida, correo electrónico: luz.calderon@hotmail.com, quien puede ser citado a través del suscrito, para que declare lo que le consta acerca de los hechos de la demanda y lo que pueda interesar al proceso por ser conocedor directo de los hechos, quien depondrá a cerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y de los perjuicios causados.
  
- ANDERSON BURBANO, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.143.949.003, conductor de la ambulancia de placa

DCK495, donde se trasporto a la señora Daniela Ramírez Hurtado a la clínica Cristo Rey; domiciliado en la ciudad de Cali, dirección de la empresa de ambulancia AM&P DEL VALLE S.A.S., que se ubica en la calle 11 A No. 53 21, Cali, Valle, se desconoce correo electrónica de la empresa de ambulancias y del señor Burbano, quien puede ser citado a través del suscrito, para que declare lo que le consta acerca de los hechos de la demanda y lo que pueda interesar al proceso por ser conocedor directo de los hechos, quien depondrá a cerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y de los perjuicios causados.

- JENNY LOZANO, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía Nro.1.151.982.543, paramédica de la ambulancia de placa DCK495, donde se trasporto a la señora Daniela Ramírez Hurtado a la clínica Cristo Rey; domiciliada en la ciudad de Cali, dirección de la empresa de ambulancia AM&P DEL VALLE S.A.S., que se ubica en la calle 11 A No. 53 21, Cali, Valle, se desconoce correo electrónica de la empresa de ambulancias y de la señora Lozano, quien puede ser citada a través del suscrito, para que declare lo que le consta acerca de los hechos de la demanda y lo que pueda interesar al proceso por ser conocedora directa de los hechos, quien depondrá a cerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y de los perjuicios causados.

## **ANEXOS**

Anexo 1. Poderes especiales debidamente conferidos para actuar.

Anexo 2: Copia de las cédulas de ciudadanía de los convocantes.

Anexo 3: Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Juan Esteban Bedoya Ramírez.

Anexo 4: Declaración Juramentada de convivencia en unión marital de hecho.

Anexo 5: Copia del informe policial de accidente de tránsito No. A001113940.

Anexo 6: Copia de la Historia Clínica de la señora Daniela Ramírez.

Anexo 7: Copia de Historia Clínica No. 41485, realizada por personal de la ambulación.

Anexo 8: Copia del Soat de seguros del Estado No. 14226800011370.

Anexo 9: Copia de Tarjeta de propiedad de la Motocicleta de placa BKZ87D.

Anexo 10: Copia de certificación laboral de la señora Daniela Ramírez.

Anexo 11: Copia del registro fotográfico de la vía.

Anexo 12: Copia de fotografías de la lesión de la señora Daniela Ramírez.

Anexo 13: Copia del derecho de petición radicados en la ventanilla única de la Alcaldía de Santiago de Cali. Con fecha de radicación el 13 de febrero de 2023.

Anexo 14: Copia del derecho de petición radicados por medio virtual de la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali. Con fecha de radicación el 10 de marzo de 2023.

Anexo 15: Copia de respuesta al derecho de petición radicado virtual el 10 de marzo de 2023.

Anexo 16: Acta No. 4173.405.1.14.006 de fecha del 13 de marzo de 2018.

Anexo 17: Acta No. 4173.405.1.14.010 de fecha del 10 de abril de 2018.

Anexo 18: Acta de la Junta Administradora Local comuna 5, sesión extraordinaria realizada el día 13 de junio de 2019.

Anexo 19: Formatos de Sistema de Gestión y Control Integrados – Instrumento de Identificación de problemáticas territoriales por instancia de participación - año 2019 – Junta de acción comunal del barrio Los Guayacanes, Junta de acción comunal del barrio Villa de Veracruz, parque barranquilla, Unidades residenciales, sector norte comuna 5, comité de planeación del municipio de Santiago de Cali, Valle.

Anexo 20: Acta No. 4173.405.1.14.14 de fecha del 28 de octubre de 2020.

Anexo 21: Publicación de Facebook realizada el día 30 de marzo de 2022, el alcalde JORGE IVAN OSPINA.

Anexo 22: Copia del Acta de Audiencia de conciliación extrajudicial expedida por la Procuraduría 60 Judicial I para asuntos administrativos, con fecha del 12 de enero de 2023.

Anexo 23: Copia de Constancia de Trámite Conciliatorio Extrajudicial Administrativo – conforme audiencia celebrada el 12 de enero de 2023 - Declara fallida la conciliación.

## **CAPITULO 11.** **NOTIFICACIONES**

De conformidad con lo consagrado en el numeral 7 del artículo 162 del CPACA136, así como el artículo 8 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, informo al Despacho que, las direcciones físicas y electrónicas que se citan a continuación, son las designadas por las respectivas entidades para recibir las notificaciones judiciales de acuerdo con lo publicado en sus páginas web, así como las proporcionadas por los demandantes:

### **Demandantes:**

Los demandantes en la dirección de notificación: calle 73 B No.3BN – 50 de la ciudad de Cali. Correo electrónico: [dependientejuridico@gmail.com](mailto:dependientejuridico@gmail.com).

**Apoderado del demandante:** El suscrito apoderado, en Calle 61 No. 1 A 8 – 17 Apto. 204 de la ciudad de Cali. Teléfono: 3176810068. Correo electrónico: [derecholegalyvialsas@outlook.com](mailto:derecholegalyvialsas@outlook.com) ; [luz.calderon@hotmail.com](mailto:luz.calderon@hotmail.com).


**Demandados:**

La entidad convocada Nación – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, en la forma establecida por el artículo 197, 198, 199 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 612 del Código General del Proceso.

correo electrónico: [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co).

Dirección: Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 – 70.

Del señor Juez,



**LUZ ADRIANA CALDERÓN GÓMEZ**  
C.C. No. 67.029.642 de Cali.  
T.P. No. 338.585 del C. S. de la J.